

210

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

EXPEDIENTE 11001 33 35 021 2016 00483 00

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

El medio de control de NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, instaurado por la señora LUZ MARINA SÁNCHEZ DE RESTREPO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, ingresa al Despacho para el siguiente

ASUNTO

Resolver la solicitud de la parte demandada en el sentido que se llame en garantía al Instituto de Hidrología Meteorología y Estudio Ambientales – IDEAM, visible a folios 174 y 175 del expediente. Al respecto se

CONSIDERA

La figura del llamamiento en garantía la establece el artículo 225 del CPACA en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.”.

Se desprende de la norma trascrita que el llamamiento procede en los casos que el demandado considere que existe otra persona, natural o jurídica, que debe contribuir con los gastos que origine la eventual condena. Aquí la UGPP estima que el IDEAM es la persona jurídica que participa de los costos que genere la eventual reliquidación de la pensión de la actora. Esta afirmación se realiza con fundamento en que la reliquidación se solicita sobre factores

211

sobre los cuales no se efectuaron aportes, por lo que en caso de ordenarse la reliquidación, el IDEAM en calidad de empleador, tendría que pagarle los aportes sobre los factores que se incluyan del ahora pensionado, y ésta sería la forma como contribuiría a sufragar los gastos de la hipotética condena.

El planteamiento de la parte que origina esta providencia no consulta las normas en materia de seguridad social, según las cuales la administradora de la prestación – la UGPP – tiene los mecanismos o procedimientos para efectuar la recaudación de los aportes.

En primer lugar, frente a los empleadores que omitieron el deber de afiliación a la seguridad social, la legislación tiene previsto el procedimiento de cuota parte pensional, de iguales connotaciones jurídicas al hoy bono pensional. Este procedimiento viene de vieja data, pues se concibió a través de los artículos 29¹ de la Ley 6ª de 1945 y 1² de la Ley 24 de 1947, y se reglamentó mediante el Decreto 2921 de 1948 *“por el cual se reglamenta el artículo 21³ de la Ley 72 de 1947⁴”*. Normas posteriores ratifican las facultades de la entidad pagadora de la pensión y el anunciado procedimiento⁵, las cuales

¹ “ARTÍCULO 29. Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas. (...)”.

² “ARTÍCULO 10. El Artículo 29 de la Ley 6a. de 1945, quedará así:

ARTÍCULO 29. Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo, en relación con la jubilación y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido y al salario o remuneración devengados en cada una de aquellas. (...)”.

³ “ARTÍCULO 21. Los empleados nacionales, departamentales o municipales que al tiempo de cumplir su servicio estén afiliados a una Caja de Previsión Social tendrán derecho a exigirle el pago de la totalidad de la pensión de jubilación. (...)”

⁴ Ley 72 de 1947, “por la cual se modifican los artículos 19 y 25 de la Ley 74 de 1945, se dictan disposiciones relacionadas con las prestaciones sociales del personal uniformado y civil de la Policía Nacional y otras sobre Cajas de Previsión Social”.

⁵ La normativa, en orden cronológico, es la siguiente:

“ARTÍCULO 28. La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince días para objetarlo”. (Decreto 3135 de 1968).

“Artículo 75º - Efectividad de la pensión.

1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión.

2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora.

3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 30. del citado decreto la entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamento legal, se entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.

El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de reconocimiento de la pensión”. (Decreto 1848 de 1969).

212

se mantienen vigentes por disposición de la Ley 100 de 1993, como lo han reconocido la Corte Constitucional⁶, Corte Suprema de Justicia⁷, y el Consejo de Estado⁸. Actualmente, el título IV la Ley 100 de 1993 regula la concurrencia en similares términos (artículos 121, 122 y 124).

Ahora, si se trata del empleador que si tenía afiliado al trabajador al sistema de pensiones pero pagó parcialmente los aportes, el ordenamiento jurídico facultó a la administradora de la prestación – la UGPP – para que adelante las gestiones para recaudar la cartera morosa, según los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994. La jurisprudencia tiene igual entendimiento del asunto⁹.

En cualquier caso, la parte interesada en conseguir los recursos financieros – la UGPP - tiene una acción expedita para el cobro de las deudas de la seguridad social, cuál es, el proceso ejecutivo en sede administrativa que desplaza el proceso ordinario ante la administración de justicia. La acción ejecutiva de naturaleza administrativa está prevista en la Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006.

Ahora, los empleadores tendrán la oportunidad, en los correspondientes trámites que adelante la entidad pagadora de la pensión, de ejercer los

"ARTICULO 2o. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos." (Ley 33 de 1985).

Más adelante en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 reglamentado, primero, por el artículo 28 del Decreto 1160 de 1989 y luego por el Decreto 2709 de 1994, en su:

"Artículo 11. Cuotas partes. Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente.

Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión."

Finalmente, la Ley 100 de 1993 se refiere al esquema primario en el artículo 121 de los "Bonos pensionales y cuotas partes a cargo de la Nación"; artículo 122 que trata de los "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensionales de las Cajas, Fondos o Entidades Públicas no sustituidos por el Fondo de pensiones públicas del nivel nacional"; y artículo 124 referente a los "Fondos para pago de cuotas partes y bonos pensionales de las Empresas que tienen a su cargo exclusivo las pensiones de sus empleados"

⁶ Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2002. En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-431 de 2002, T-463 de 2002, T-529 de 2002, T-818 de 2002, T-866 de 2002, T-1010 de 2002, T-1011 de 2002 y T-585 de 2003.

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 14 de diciembre de 2001, expediente 15977. Providencia que ha sido reiterada por la misma Corporación en numerosas ocasiones.

⁸ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 20 de agosto de 1998, rad. 1108; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 22 de noviembre de 2001, rad. 1383; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 17 de noviembre de 2005, rad. 11001-03-25-000-2001-00251-00(3578-01).

⁹ "4.3. En este orden de ideas, cuando el empleador no traslada los aportes a la entidad de seguridad social, ésta última tiene el deber de cobrar los dineros adeudados por el empleador moroso a través de los mecanismos jurídicos establecidos en la Ley." (T-362 de 2011).

213

mecanismos de defensa previstos en la ley. En tal sentido, no sirve de excusa que no fue vinculado al juicio porque la sentencia que declara el derecho a la reliquidación automáticamente crea la carga para todos los que en su momento fungieron como empleadores que omitieron el pago parcial o total de aportes, pues este tipo de controversia está diseñado exclusivamente para definir el derecho pensional, más no las contribuciones financieras para la pensión, que como se ha visto tienen un trámite especial.

De esta forma, el legislador quiso evitar que al juicio tuvieran que concurrir todos los empleadores del pensionado, pues afectaría el derecho del pensionado a una pronta justicia, pues elevaría los costos del trámite y dilataría el trámite del proceso frente a las pruebas y excepciones que podrían formular cada uno de los posibles empleadores. Ello también iría en contra de los derechos al mínimo vital, la dignidad y especial protección de las personas de la tercera edad.

Por los razonamientos expuestos a lo largo de este proveído, el Despacho procederá negar la solicitud de llamamiento en garantía formulada por la administradora de la prestación

RESUELVE:

NEGAR el llamamiento en garantía que la apoderada judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Unidad de Protección Social —UGPP, le formula al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por las razones aquí expuestas.

Notifíquese y cúmplase.


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

gpg